Ciudades-Estado Sin Límites (resumen)

Por Iain Davis
9 de octubre de 2025
Publicado en: https://unlimitedhangout.com
Substack del autor: https://iaindavis.substack.com

Parte I

Introducción

Un poderoso grupo de oligarcas de Silicon Valley está utilizando la administración Trump para impulsar la creación de ciudades-estado privatizadas en Estados Unidos. Sus intereses coinciden con los de una red global de oligarcas que buscan abandonar la gobernanza global de los estados-nación y adoptar la gobernanza global de una red internacional de ciudades-estado. La intención es que estas ciudades-estado conformen un mosaico de reinos supervisados por un sistema de gobernanza global basado en el equilibrio regional de poder: el Orden Mundial Multipolar.

El artículo «City-States Without Limits – Part 1», escrito por Iain Davis (2025), denuncia que un grupo poderoso de oligarcas de Silicon Valley —como Peter Thiel, Elon Musk y Marc Andreessen— está utilizando la administración de Donald Trump para impulsar la creación de ciudades-estado privatizadas en EE.UU., conocidas allí como “Freedom Cities”. Estas entidades urbanas, ya sean construidas desde cero o insertadas en ciudades existentes, comparten características clave: están centralmente planificadas, usan tecnología de vigilancia avanzada, y tienen jurisdicción autónoma respecto a los Estados-nación donde se ubican.

Dichas ciudades-estado forman parte de una estrategia global para reemplazar la gobernanza tradicional de los Estados soberanos por una red internacional de enclaves corporativos, alineados con iniciativas de gobernanza global como las Zonas Económicas Especiales (SEZ), las “ciudades de 15 minutos” o las “ciudades resilientes” promovidas por organismos como la ONU o C40. Todos estos modelos comparten un objetivo común: implementar políticas de gobernanza global descentralizando el poder estatal, pero centralizándolo en manos privadas.

Este proyecto se sustenta ideológicamente en dos corrientes convergentes: el Dark Enlightenment (Ilustración Oscura) y la Tecnocracia. El primero, impulsado por figuras como Nick Land y Curtis Yarvin (también conocido como Mencius Moldbug), propone reemplazar los gobiernos democráticos por “corporaciones soberanas” (sovcorps) dirigidas por CEO-dictadores o “Tecnoreyes”, en un entramado global llamado “Patchwork”: miles de mini-Estados corporativos sin soberanía popular. Yarvin ha descrito explícitamente este modelo como un sistema donde los residentes carecen de voz, y sus vidas se gestionan como clientes, no como ciudadanos.

La segunda corriente, la Tecnocracia, busca controlar todos los aspectos de la sociedad mediante sistemas tecnológicos centralizados. Aquí, los seres humanos son tratados como “motores humanos” cuyo comportamiento se programa mediante el monitoreo total de transacciones económicas, recursos y datos personales. En este esquema, la moneda digital y la identidad digital se vinculan a un libro mayor unificado, que permite a quienes lo controlan determinar qué puede o no hacer cada individuo.

Ambas ideologías coinciden en su rechazo a la democracia, su fe ciega en la tecnología como solución universal, y su aspiración a una dictadura oligárquica disfrazada de innovación.

El artículo profundiza en cómo el proyecto de las ciudades-estado privatizadas —impulsado por oligarcas de Silicon Valley como Thiel, Musk y Andreessen— se articula ideológicamente en torno a dos pilares: el Dark

Enlightenment y la Tecnocracia. Ambos rechazan la democracia y proponen reemplazarla por regímenes autoritarios disfrazados de innovación tecnológica.

Curtis Yarvin (Mencius Moldbug), figura clave del Dark Enlightenment, concibe un mundo fragmentado en miles de "mini-Estados" corporativos (sovcorps), gobernados por CEO-dictadores sin rendición de cuentas. En su visión, los habitantes no son ciudadanos, sino clientes cuya existencia se legitima únicamente mediante su presencia en un libro mayor digital (blockchain). Este sistema elimina cualquier soberanía individual: quien controla el registro de activos, controla la vida de las personas.

Paralelamente, la Tecnocracia, promovida abiertamente por Elon Musk —quien en 2024 celebró la idea de una "Tecnocracia marciana"— propone un modelo en el que los seres humanos se convierten en "motores humanos" cuyo comportamiento se diseña mediante la vigilancia total del sistema económico y el control centralizado de todos los recursos. La moneda digital y la identidad digital vinculadas permiten programar el comportamiento social a gran escala.

Ambas ideologías convergen en su fe en la inteligencia artificial (IA) como herramienta de gobernanza. Para Yarvin y Nick Land, la IA no es un instrumento, sino una entidad soberana futura —incluso una "inteligencia no humana"— que acabará dominando la Tierra desde el espacio, en forma de una "Autoridad Orbital". Esta metáfora describe un sistema global de control militar y político, autónomo y monopolístico, capaz de anular cualquier resistencia terrestre. En la práctica, representa una dictadura global disfrazada de neutralidad algorítmica.

Críticamente, el artículo subraya que estos supuestos "anti-globalistas" forman parte de la misma oligarquía global que promueve la gobernanza multinivel. Thiel y Alex Karp (CEO de Palantir) forman parte del Grupo Bilderberg, una red privada que influye en la política de la OTAN y en la arquitectura de seguridad occidental. Lejos de oponerse al gobierno mundial, estos actores buscan reconfigurarlo bajo un modelo corporativo descentralizado en apariencia, pero hipercentralizado en el control real.

Esta estrategia se materializa mediante las Zonas Económicas Especiales (SEZ), que ya existen en más de 135 países. Estas zonas —como las "Freeports" del Reino Unido, NEOM en Arabia Saudí o la ZEDE de Próspera en Honduras— operan como jurisdicciones independientes con leyes propias, exenciones fiscales extremas y autonomía regulatoria. Funcionan como laboratorios de gobernanza privada, donde los inversores oligárquicos prueban modelos de control social antes de escalarlos globalmente.

El artículo describe cómo las Zonas Económicas Especiales (SEZ) actúan como el andamiaje legal y territorial para la creación de ciudades-estado privatizadas. Estas zonas, presentes en más de 135 países y ya más de 5000 a nivel global, operan con jurisdicción propia, normas fiscales y laborales propias, y una autonomía regulatoria que las separa del Estado-nación que las alberga.

En el modelo típico de SEZ, se crea una autoridad corporativa mixta (pública-privada) que funciona como entidad legal autónoma. Esta autoridad, gestionada por un consejo en el que participan representantes gubernamentales, del banco central y, crucialmente, inversores privados (como fondos de capital riesgo y filántropos oligarcas), nombra a un CEO que dirige la zona como si fuera una empresa.

Este esquema es idéntico al propuesto por Balaji Srinivasan en su libro The Network State: una red de enclaves físicos vinculados digitalmente mediante un libro mayor unificado (blockchain), donde todos los activos, identidades y transacciones quedan registrados. En este sistema, "nada existe oficialmente a menos que esté en cadena" (on-chain). La identidad digital (como ENS en Ethereum) se convierte en requisito para acceder a servicios, propiedad o incluso movilidad dentro del enclave.

El artículo subraya que, aunque Srinivasan evita aclarar si el libro mayor será permisionado o no permisionado, su crítica al "maximalismo de Bitcoin" —asociado a blockchains abiertos y descentralizados— sugiere una preferencia por sistemas centralizados y controlados por los fundadores. En su visión, los "usuarios" firman un "contrato social inteligente" que otorga a los administradores del sistema amplios poderes sobre su vida digital:

desde congelar fondos hasta bloquear su identidad digital como castigo por “mala conducta”, tras un juicio arbitrado por IA.

Este modelo, lejos de ser libertario, implica una esclavitud digital voluntaria: los individuos aceptan someterse a la autoridad absoluta del fundador a cambio de pertenecer a una “sociedad de alta confianza”. Pero esa confianza no surge de la igualdad o los derechos, sino del control criptográfico y la sumisión contractual. Además, la posibilidad de “irse libremente” es ilusoria para quienes carecen de recursos para reubicarse.
El texto también examina casos reales de SEZ:

En el Reino Unido, el gobierno de Keir Starmer ha asociado al fondo BlackRock —liderado por Larry Fink, figura del Foro Económico Mundial— en el desarrollo de tres freeports (puertos francos con residencias), invirtiendo casi 20000 millones de libras en infraestructura para generar apenas 5.600 empleos, sin garantía de que sean nuevos puestos.
En los Emiratos Árabes Unidos, las SEZ permiten a empresas extranjeras operar sin socios locales, sin impuestos y sin presencia física real, ejerciendo control desde paraísos fiscales como las Islas Caimán.
En Arabia Saudí, la megaciudad NEOM cuenta con su propio sistema judicial, leyes laborales y tributarias independientes del resto del país.
En Nigeria, la zona de Itana funciona como territorio extraterritorial: “una vez dentro, estás fuera del Estado nigeriano”.
Sin embargo, muchas SEZ se han convertido en focos de corrupción y crimen organizado. El informe de investigadores británicos cita la Zona Económica Especial del Triángulo Dorado en Laos, controlada por una empresa vinculada a un presunto narcotraficante chino, donde prosperan el tráfico de drogas, personas y vida silvestre.

Estos ejemplos ilustran que las SEZ no son meros experimentos económicos, sino laboratorios de gobernanza privada donde se prueba un modelo que podría extenderse globalmente: ciudades-estado corporativas, autónomas, con población cautiva y reglas dictadas por oligarcas tecnológicos.

El artículo examina cómo los promotores de las ciudades-estado privatizadas —especialmente los tecnócratas del Dark Enlightenment— presentan su modelo como una alternativa libertaria a los Estados-nación, pero en la práctica construyen jurisdicciones oligárquicas con autoridad absoluta. Balaji Srinivasan, en su libro The Network State, describe un sistema en el que una comunidad digital se convierte en un “archipiélago” de nodos físicos interconectados mediante un libro mayor unificado (blockchain). Todo lo que existe —propiedad, identidad, transacciones— debe estar “en cadena” (on-chain). Fuera de ese registro digital, nada tiene reconocimiento legal.

Este modelo exige una identidad digital vinculada a la moneda digital, como el ENS (Ethereum Name Service), para acceder a cualquier derecho o servicio dentro del enclave. Los residentes firman un “contrato social inteligente” que otorga a los administradores del sistema —los “fundadores”— amplios poderes: pueden congelar depósitos, bloquear identidades o restringir el acceso a dispositivos (puertas, neveras, transporte) tras un “juicio” arbitrado por IA, en caso de “mala conducta”.

Aunque Srinivasan no especifica si el libro mayor será permisionado o no permisionado, critica abiertamente el “maximalismo de Bitcoin”, asociado a blockchains abiertos y descentralizados, lo que sugiere una preferencia por sistemas centralizados y controlados por los fundadores. Además, el propio Srinivasan reconoce que el poder tecnológico ya está siendo centralizado por grandes empresas, y que su propuesta no busca revertirlo, sino “confinarlo” dentro de enclaves privados.

La ironía es que los mismos actores que denuncian el control estatal están construyendo los sistemas de vigilancia y castigo digital que luego presentan como inevitables. En lugar de abolir la tiranía, la trasladan a manos privadas: los “fundadores” se convierten en monarcas tecnológicos con control total sobre la vida digital —y, por tanto, física— de sus “usuarios”.

El artículo destaca que esta arquitectura ya se está implementando a través de las Zonas Económicas Especiales (SEZ). En el Reino Unido, el gobierno de Keir Starmer ha asociado a BlackRock —liderado por Larry Fink,

figura del Foro Económico Mundial— en el desarrollo de tres freeports (puertos francos con zonas residenciales), invirtiendo casi 20000 millones de libras para generar apenas 5.600 empleos, sin pruebas claras de creación neta de puestos ni beneficio social.
En los Emiratos Árabes Unidos, las SEZ permiten a empresas extranjeras operar sin socios locales, sin impuestos y sin presencia física real, gestionando todo desde paraísos fiscales como las Islas Caimán. En Arabia Saudí, NEOM tiene su propio sistema judicial, leyes laborales y fiscales independientes del resto del país. En Nigeria, la zona de Itana funciona como territorio extraterritorial: “una vez dentro, estás fuera del Estado nigeriano”.

Sin embargo, muchas SEZ se han convertido en focos de corrupción y crimen organizado. El informe de investigadores británicos cita la Zona Económica Especial del Triángulo Dorado en Laos, controlada por una empresa vinculada a un presunto narcotraficante chino, donde prosperan el tráfico de drogas, personas y vida silvestre.

Estos casos muestran que las SEZ no son meros experimentos económicos, sino laboratorios de gobernanza privada donde se prueba un modelo que podría extenderse globalmente: ciudades-estado corporativas, autónomas, con población cautiva y reglas dictadas por oligarcas tecnológicos.

El artículo concluye la primera parte examinando cómo las Zonas Económicas Especiales (SEZ) no solo son instrumentos económicos, sino vehículos ideológicos para implementar un nuevo modelo de gobernanza global basado en jurisdicciones corporativas. Estas zonas, promovidas por gobiernos en colaboración con oligarcas tecnológicos y fondos de inversión como BlackRock, operan como enclaves extraterritoriales con leyes propias, exenciones fiscales extremas y autonomía regulatoria frente al Estado-nación anfitrión.

Un caso emblemático es Próspera, en la isla de Roatán (Honduras), una ciudad-estado privada impulsada por figuras del Dark Enlightenment como Peter Thiel, Marc Andreessen y Balaji Srinivasan, a través del fondo de inversión Pronomos Capital. Aunque la Corte Suprema hondureña declaró inconstitucionales las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico) en 2024 tras años de protestas ciudadanas, los inversores utilizaron el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial para forzar al gobierno a garantizar sus inversiones durante 50 años, neutralizando así la voluntad democrática del país.

Este patrón revela que, lejos de ser proyectos libertarios, las ciudades-estado corporativas se imponen mediante presión financiera y jurídica internacional, protegiendo los intereses de los oligarcas incluso frente a decisiones soberanas. En Próspera, los habitantes locales fueron desplazados sin consentimiento, sus recursos hídricos y territorio privatizados, y no han recibido beneficios tangibles, lo que ha generado acusaciones de colonialismo corporativo.

El artículo subraya que estas iniciativas forman parte de una estrategia global coordinada. Instituciones como el Foro Económico Mundial, el Grupo Bilderberg, la Comisión Trilateral y think tanks como el Institute for Decentralized Governance (vinculado a Nick Land y Patri Friedman, nieto de Milton Friedman) promueven la idea de que la “gobernanza privada” es superior a la estatal. Fondos como Pronomos Capital y firmas como Adrianople Group —cuyos fundadores están integrados en círculos neorreaccionarios— mapean y financian ciudades maestras en todo el mundo (Arabia Saudí, Egipto, Indonesia) con el objetivo de crear un mercado global de gobiernos privados.

Crucialmente, el modelo no depende de la aceptación popular, sino de alianzas entre élites oligárquicas y gobiernos funcionales (que, según estudios políticos citados, ya operan como oligarquías disfrazadas de democracias). La implementación se realiza a través de acuerdos de estabilidad jurídica, financiación pública para beneficio privado —como los casi 20000 millones de libras del gobierno británico para apenas 5600 empleos en freeports— y la promesa de “prosperidad” que rara vez se materializa.

Finalmente, el texto anticipa que la segunda parte del artículo abordará cómo este sistema está diseñado para capturar poblaciones vulnerables, especialmente refugiados y migrantes, convirtiéndolos en habitantes cautivos de estas ciudades-estado. Se sugiere que los mismos actores que controlan la tecnología de vigilancia, la

identidad digital y los flujos financieros también influyen en las políticas migratorias, con el fin de crear un mercado cautivo de “usuarios” gestionados algorítmicamente en enclaves privados.

Así, el proyecto de las “ciudades sin límites” no es una alternativa al poder global, sino su reconfiguración corporativa: descentralizada en apariencia, pero hipercentralizada en el control real, bajo la batuta de una oligarquía tecnológica que se erige como dueña de los futuros territorios de la humanidad.

Parte II

16 de octubre de 2025.

Introducción

En la primera parte, analizamos las ideas de los tecnócratas NRx y su influencia en el modelo de ciudad-estado que busca capitalizar la proliferación global de Zonas Económicas Especiales (ZEE). Examinamos el papel de las oligarquías funcionales en este empeño. En la segunda parte, examinamos cómo se manifiesta este modelo de ciudad-estado a nivel internacional y sus implicaciones, no solo para las estructuras de gobernanza global, sino también para la humanidad.

La segunda parte del artículo «City-States Without Limits», de Iain Davis (2025), profundiza en cómo el modelo de ciudades-estado privatizadas —impulsado por tecnócratas neorreaccionarios (NRx) como Peter Thiel, Elon Musk y Marc Andreessen— se está implementando a escala global, con el apoyo explícito de organismos intergubernamentales como las Naciones Unidas (ONU), el Foro Económico Mundial (WEF) y redes de ciudades como C40 y el Pacto Mundial de Alcaldes (GCoM).

Estas ciudades-estado, también denominadas gov-corp Technates, se conciben como enclaves digitales autónomos gobernados por corporaciones soberanas (sovcorps), donde los habitantes no son ciudadanos sino “clientes” sometidos a un libro mayor unificado (blockchain). En este sistema, “nada existe oficialmente a menos que esté en cadena” (on-chain). La identidad digital vinculada a una moneda programable permite a los “fundadores” —oligarcas tecnológicos— congelar depósitos, restringir el acceso a servicios o encerrar digitalmente a quienes consideren que “han actuado mal”, sin posibilidad de apelación. La única vía de escape es huir, si se tiene capacidad económica para hacerlo.

El artículo destaca que este modelo no es teórico: ya se está aplicando mediante Zonas Económicas Especiales (SEZ) en todo el mundo. Casos como Shenzhen (China) o Próspera (Honduras) demuestran cómo estas zonas adquieren jurisdicción independiente, tribunales propios y leyes laborales y fiscales diferenciadas del Estado-nación que las alberga. En Shenzhen, por ejemplo, se ha implementado un modelo de “ciudad inteligente” basado en un “Cerebro Urbano” (City Brain) que integra cuatro redes (gobierno, videovigilancia, IoT e internet) en una base de datos centralizada —el “1” en el modelo “4321+X”— que alimenta un sistema de gobernanza impulsado por inteligencia artificial.

Aunque los medios suelen destacar los beneficios sociales de estas ciudades inteligentes, el artículo advierte que su verdadero propósito es el control conductual a gran escala. Este control se refuerza mediante la integración con Sistemas de Crédito Social (SCS), que ya existen en formas diversas no solo en China, sino también en Occidente (como en EE.UU. con Operation Choke Point o en Canadá con el cierre de cuentas a manifestantes legales). El SCS recompensa o castiga conductas sin necesidad de procesos judiciales, basándose en el acceso restringido a servicios públicos o privados.

La conclusión es que las ciudades inteligentes no son meras innovaciones urbanas, sino laboratorios de gobernanza autoritaria digital, diseñados para enlazar vigilancia, identidad digital, moneda programable y

algoritmos punitivos en un sistema de control total. Este sistema, lejos de ser marginal, está siendo promovido como el núcleo de la Nueva Agenda Urbana de la ONU y su objetivo de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El artículo detalla cómo el modelo de las ciudades-estado privatizadas no es exclusivo de ideólogos marginales, sino que está respaldado abiertamente por instituciones globales clave. La ONU, a través de UN-Habitat y su Nueva Agenda Urbana, impulsa activamente la transformación de las ciudades en "ciudades inteligentes" mediante la integración de lo que denomina "tecnologías frontera": Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial, drones, blockchain, sensores, vehículos autónomos y procesamiento masivo de datos.

Estas tecnologías se implementan a través de alianzas público-privadas bajo el paradigma del capitalismo de partes interesadas (stakeholder capitalism), en el que gobiernos locales y corporaciones multinacionales toman decisiones conjuntas. En este esquema, los gobiernos ceden control sobre infraestructuras urbanas —farolas, postes eléctricos, espacios aéreos, etc.— para que se conviertan en activos "inteligentes" que generen nuevos flujos de ingresos para los socios privados.

El artículo subraya que este modelo ya se aplica en múltiples países. En Vietnam, por ejemplo, el Proyecto 06 vincula la identidad digital del ciudadano (VNeID) con un Centro de Operaciones Inteligentes (IOC) o "Cerebro Urbano", vinculado al Ministerio de Seguridad Pública. Los ciudadanos deben verificar su identidad digital al nivel 2, subir documentos a cuentas digitales y usar pagos sin efectivo, lo que convierte sus teléfonos en "micrófonos" del Estado. Quienes no cumplan ven congeladas sus cuentas bancarias, en un proceso de exclusión sistemática disfrazado de "transformación digital inclusiva".

Este enfoque no es una excepción, sino la norma dentro de la agenda global. La ONU, junto con el Foro Económico Mundial (WEF), lanzó en 2022 la Alianza Global para la Inversión Local (GPLI), que incluye la Alianza Global de Ciudades Inteligentes del G20, cuyo objetivo explícito es facilitar el acceso de capitales privados a proyectos urbanos. Esta alianza promueve que las ciudades "repoten" sus activos físicos para desplegar infraestructura digital, generando nuevas fuentes de ingresos compartidas entre socios públicos y privados.

Asimismo, el grupo BRICS+ (ahora con Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Egipto, Etiopía e Irán) ha adoptado una postura similar, promoviendo ciudades inteligentes impulsadas por la IA. China lidera este esfuerzo en ciudades como Shanghái y Shenzhen, y el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) del BRICS financia infraestructura sostenible basada en IA. La cooperación Sur-Sur, canalizada a través de bancos multilaterales como el Banco Islámico de Desarrollo (IsDB) y el Grupo del Banco Mundial, refuerza esta arquitectura global de gobernanza urbana descentralizada en apariencia, pero coordinada desde el centro.

En resumen, tanto Occidente como el llamado Sur Global avanzan en paralelo hacia un mismo modelo: ciudades hiperconectadas, gobernadas mediante algoritmos y monitoreadas en tiempo real, donde la identidad digital es obligatoria y el acceso a servicios depende del cumplimiento de reglas definidas por actores privados y organismos internacionales, no por gobiernos electos.

El artículo profundiza en cómo los promotores de las ciudades-estado privatizadas están dirigiendo su atención hacia las personas desplazadas y refugiadas como fuente inicial de "población cautiva" para sus enclaves. Figuras como Christian Kälin —fundador de la Andan Foundation y presidente de Henley & Partners, empresa especializada en "ciudadanía por inversión"— y Titus Gebel —ex presidente del Seasteading Institute y socio de NeWay Capital— proponen crear "Ciudades Globales Libres" donde los refugiados servirían como fuerza laboral motivada en un entorno de gobernanza privada.

Estas "Ciudades Globales" se presentan como solución humanitaria a la crisis migratoria, pero en realidad funcionan como proyectos de inversión rentable: los promotores buscan territorios deshabitados o poco poblados cedidos por gobiernos cooperantes, para construir enclaves autónomos con jurisdicción propia, reglas fiscales propias y un sistema de identidad digital obligatoria basado en blockchain. Según Gebel, los refugiados firmarían un "contrato social inteligente" que les otorgaría acceso a servicios básicos a cambio de sumisión a las reglas del "fundador".

El artículo subraya que Kälin ha estado involucrado en múltiples escándalos de corrupción relacionados con sus programas de “ciudadanía por inversión”. En Saint Kitts y Nevis, su empresa Henley & Partners canalizó inversiones que terminaron beneficiando a empresas vinculadas a Kälin, mientras el gobierno local perdía tierras agrícolas estratégicas sin retorno económico. En Malta, su participación en el programa de ciudadanía por inversión se vio salpicada por el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, quien investigaba los casos de corrupción vinculados a Henley. Más recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal el programa maltés, calificándolo como una “transacción comercial” más que un acto soberano.

A pesar de esto, la Andan Foundation mantiene una asociación formal con la ONU, específicamente con el ACNUR, para “impulsar la participación del sector privado” en la gestión de refugiados. El objetivo declarado es crear “soluciones a largo plazo”, pero en la práctica se trata de canalizar fondos directamente a ciudades-estado sin pasar por gobiernos nacionales, tal como lo promueve el Fondo Mundial de Ciudades para Migrantes y Refugiados del Consejo de Alcaldes sobre Migración (MMC).

Este fondo, respaldado por la Rockefeller Philanthropy Advisors, permite a inversores privados financiar directamente a gobiernos locales para implementar proyectos de identidad digital, registro biométrico y acceso condicionado a servicios. El artículo señala que el Pacto Mundial para la Migración de la ONU exige que todos los migrantes tengan “prueba de identidad legal” —es decir, identidad digital compatible con estándares globales—, y que los municipios emitan “tarjetas de registro” que contengan datos personales básicos. Esto convierte el acceso a servicios esenciales en un privilegio condicionado a la sumisión al sistema digital global.

El texto concluye que no existe evidencia de que el cambio climático esté impulsando la migración forzada, como afirma la ONU, pero esta narrativa se utiliza deliberadamente para justificar la implementación de infraestructuras de control digital bajo el pretexto de la “gestión humanitaria”. Así, los refugiados —al carecer de alternativas reales— se convierten en los primeros “clientes” de las ciudades-estado corporativas, donde su trabajo y su comportamiento serán gestionados algorítmicamente, con la amenaza constante de congelamiento de cuentas o bloqueo de acceso a servicios esenciales si no cumplen con las normas impuestas.

El artículo detalla cómo, en Estados Unidos, el proyecto de ciudades-estado privatizadas se está implementando bajo la figura de las “Freedom Cities”, promovidas abiertamente por Donald Trump durante su campaña electoral de 2023. Según Bloomberg, estas ciudades serían “pueblos de alta tecnología libres de la legislación estatal y de la mayoría de las normas federales”, incluyendo leyes fiscales (como el Código Tributario), ambientales (Ley del Agua Limpia, Ley de Especies en Peligro), laborales (Ley de Normas Razonables de Trabajo, OSHA) y sanitarias (Ley del Cuidado Asequible).

Actualmente, EE.UU. cuenta con alrededor de 300 Zonas Económicas Especiales (SEZ), lo que facilita la expansión del modelo. Las Freedom Cities se diferencian en que se construirían en terrenos públicos vendidos directamente a inversores privados, convirtiéndolos en jurisdicciones autónomas. Inicialmente, esta venta de tierras públicas se incluyó en el proyecto legislativo de Trump conocido como “One Big Beautiful Bill”, pero fue retirada ante la oposición ciudadana y política. Ahora, los promotores del modelo buscan usar el Fondo de Riqueza Soberana (Sovereign Wealth Fund) propuesto por Trump para lograr el mismo objetivo: liquidar tierras públicas y transferirlas a oligarcas tecnológicos.

Detrás de esta iniciativa está una red de actores del NRx (neorreaccionarismo) y del capital de riesgo alineado con la ideología del Dark Enlightenment. Figuras como Sam Altman (OpenAI), Larry Ellison (Oracle) y Masayoshi Son (SoftBank) han sido asociadas directamente al anuncio del Proyecto Stargate, una alianza público-privada que pretende invertir 500000 millones de dólares en cuatro años para construir infraestructura de inteligencia artificial en EE.UU. Stargate fue presentado como respuesta a la competencia china (especialmente a DeepSeek AI), pero el artículo señala que en realidad existe una colaboración tácita entre EE.UU., China y los Emiratos Árabes Unidos en el desarrollo de IA.

Por ejemplo, BlackRock, Microsoft, NVIDIA y MGX (fondo soberano de Abu Dhabi) forman parte de la Alianza Global de Infraestructura de IA (GAIIP), creada en septiembre de 2024. MGX, a su vez, es socio clave de Stargate. En febrero de 2025, Altman visitó Abu Dhabi y consiguió una inversión inicial de 6.600 millones de dólares. Curiosamente, semanas antes, Steve Witkoff (enviado de Trump al Medio Oriente) cerró un acuerdo

con el hermano del gobernante de Abu Dhabi para que invirtieran 2000 millones de dólares en World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas de propiedad conjunta de Witkoff y la familia Trump. Aunque medios como Snopes han calificado estas coincidencias como “no probatorias de soborno”, el artículo subraya que el patrón sugiere intercambios de favores entre gobiernos y oligarcas.

Paralelamente, el artículo revela que las llamadas Freedom Cities no son una idea nueva ni original de Trump. Se trata de una reedición de los “Distritos de Prosperidad”, propuestos en 2015 por la State Policy Network (SPN), vinculada a las fundaciones Koch y Bradley. Stephen Moore, asesor económico de Trump y ex economista jefe de la Heritage Foundation (responsable del informe Project 2025), fue el portavoz de esa propuesta. Los Distritos de Prosperidad, al igual que las Freedom Cities, otorgan a entidades privadas poderes policiales, control total de servicios municipales y capacidad para derogar leyes estatales, salvo la constitución estatal, el derecho penal y los pactos existentes.

Además, el artículo muestra que Mark Lutter, director del Charter Cities Institute, preside también la Frontier Foundation, que impulsa las Freedom Cities en EE.UU. Lutter trabajó como economista jefe en NeWay Capital, fondo vinculado a Titus Gebel y a la ciudad-estado de Próspera en Honduras. La Freedom Cities Coalition (FCC), respaldada por NeWay Capital y Pronomos Capital (fondo de Thiel y Andreessen), promueve activamente que se cedan terrenos federales —el 28% del territorio de EE.UU.— para su desarrollo urbano privado.

Finalmente, el texto señala que el aparato de inteligencia estadounidense también está integrado en este proyecto. Gilman Louie, exdirector de In-Q-Tel (brazo de inversión de la CIA) y actual líder de America’s Frontier Fund (AFF) —fondo respaldado por Eric Schmidt y Peter Thiel— impulsa tecnologías “fronterizas” alineadas con la Nueva Agenda Urbana de la ONU. Esto demuestra que la implementación de las ciudades-estado no es un asunto partidista, sino una agenda transversal que vincula al establishment demócrata y republicano, al sector privado y a la comunidad de inteligencia.

El artículo detalla cómo, bajo la administración Trump, se está impulsando la creación de ciudades-estado privatizadas en Estados Unidos no solo mediante iniciativas legislativas directas, sino también a través de instrumentos financieros como el Fondo de Riqueza Soberana (Sovereign Wealth Fund, SWF). Este fondo tiene como objetivo liquidar tierras públicas federales —que representan el 28% del territorio estadounidense— para financiarse y entregarlas a inversores privados, principalmente oligarcas tecnológicos alineados con la ideología NRx (neorreaccionaria).

Detrás de esta estrategia está una red cohesiva de actores:

Stephen Moore, asesor económico de Trump y ex economista jefe de la Heritage Foundation, promovió en 2015 el modelo de los “Distritos de Prosperidad”, idéntico en esencia a las actuales “Freedom Cities”.
Mark Lutter, director del Charter Cities Institute y fundador de la consultora Braavos, preside también la Frontier Foundation, dedicada específicamente a impulsar las Freedom Cities en EE.UU.
NeWay Capital y Pronomos Capital —fondos vinculados a Peter Thiel, Marc Andreessen y Titus Gebel— financian y asesoran estos proyectos, promoviendo la idea de que las ciudades deben funcionar como “comunidades sin límites”, libres de regulaciones federales y estatales.
La Freedom Cities Coalition (FCC), respaldada por estos fondos, describe las Freedom Cities como “zonas de claridad regulatoria” donde los “emprendedores” pueden innovar sin trabas legales. En la práctica, esto implica:

Exención de leyes fiscales (Código Tributario), ambientales (Ley del Agua Limpia), laborales (OSHA, Fair Labor Standards Act) y sanitarias (Ley del Cuidado Asequible).
Creación de jurisdicciones autónomas con poderes policiales propios, control total de servicios municipales y capacidad para derogar leyes estatales, salvo la constitución estatal, el derecho penal y acuerdos existentes.
Uso de tierras federales vendidas o transferidas a corporaciones privadas, que actuarían como gobiernos locales de facto.
El artículo subraya que esta agenda no es partidista, sino transversal a la oligarquía global. Aunque Trump se presenta como adversario del “establishment”, su gobierno ha avanzado propuestas ideadas por think tanks como la Heritage Foundation (responsable del informe Project 2025) y la State Policy Network (SPN),

vinculadas a las fundaciones Koch y Bradley. Incluso figuras de la inteligencia estadounidense están integradas: Gilman Louie, exdirector de In-Q-Tel (brazo de inversión de la CIA) y actual líder de America's Frontier Fund (AFF), impulsa tecnologías "fronterizas" —como IA, sensores, drones— que coinciden exactamente con las promovidas por la Nueva Agenda Urbana de la ONU.

Crucialmente, el aparato de seguridad nacional y el sector privado tecnológico están entrelazados: empresas como Palantir (de Thiel) y Oracle (de Ellison) son contratistas clave del gobierno, y sus ejecutivos participan en redes de poder como el Grupo Bilderberg. Esto demuestra que la implementación de las ciudades-estado no responde a una ruptura con el orden global existente, sino a su reconfiguración corporativa: descentralizar el poder estatal para recentralizarlo en manos privadas, con apoyo institucional pleno.
El texto concluye que el proyecto de las Freedom Cities es una extensión directa del modelo global de Zonas Económicas Especiales (SEZ), adaptado al contexto estadounidense. Y, al igual que en Honduras con Próspera, si la resistencia ciudadana o judicial obstaculiza el proyecto, los inversores recurren a mecanismos internacionales —como el CIADI del Banco Mundial— para imponer acuerdos de estabilidad jurídica que blindan sus inversiones durante décadas, neutralizando la soberanía democrática.

El artículo concluye destacando que el impulso hacia las ciudades-estado privatizadas no es una iniciativa marginal ni aislada, sino parte de una agenda global coordinada que involucra a gobiernos, organismos intergubernamentales, fondos de inversión y oligarcas tecnológicos. Tanto en Occidente como en el llamado Sur Global, el modelo se implementa bajo el paraguas de la Nueva Agenda Urbana de la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el discurso del capitalismo de partes interesadas (stakeholder capitalism).

En Vietnam, por ejemplo, el Proyecto 06 exige a los ciudadanos verificar su identidad digital al nivel 2, vincular documentos personales a cuentas digitales y usar pagos sin efectivo. Quienes no cumplen ven congeladas sus cuentas bancarias. Este sistema, presentado como "transformación digital inclusiva", en realidad excluye a quienes no se someten al control digital total, convirtiendo a los teléfonos móviles en "micrófonos" del Estado, en colaboración con el Ministerio de Seguridad Pública.

Más allá de la tecnología, el artículo subraya que no existe evidencia de que el cambio climático esté impulsando la migración, como afirma la ONU. Sin embargo, esta narrativa se utiliza deliberadamente para justificar la creación de infraestructuras de control digital bajo el pretexto de "gestión humanitaria". Así, los refugiados —al carecer de alternativas reales— se convierten en la población piloto para las ciudades-estado corporativas.

Figuras como Christian Kälin (fundador de la Andan Foundation y presidente de Henley & Partners) y Titus Gebel (ex presidente del Seasteading Institute y socio de NeWay Capital) proponen crear "Ciudades Globales Libres" donde los refugiados firmarían un "contrato social inteligente" que les otorgaría acceso a servicios básicos a cambio de sumisión total a las reglas del "fundador". Estas ciudades se presentan como soluciones humanitarias, pero en la práctica son proyectos de inversión rentable respaldados por la ONU, ACNUR y el Fondo Mundial de Ciudades para Migrantes y Refugiados, que canaliza fondos directamente a gobiernos locales para implementar identidad digital y control algorítmico.

En Estados Unidos, el modelo se materializa a través de las "Freedom Cities", promovidas por Donald Trump y financiadas por oligarcas como Peter Thiel, Marc Andreessen, Sam Altman y Larry Ellison. Estas ciudades se construirían en tierras públicas vendidas a inversores privados, operando como jurisdicciones autónomas libres de la mayoría de leyes federales y estatales. El Fondo de Riqueza Soberana propuesto por Trump y el Proyecto Stargate —una alianza público-privada de 500000 millones de dólares para infraestructura de IA— forman parte de esta estrategia.

Crucialmente, el artículo revela que no existe verdadera competencia entre EE.UU. y China en IA, sino una colaboración tácita. El Proyecto Stargate está vinculado a MGX (fondo soberano de Abu Dhabi), que también colabora con BlackRock, Microsoft y NVIDIA en la Alianza Global de Infraestructura de IA. Al mismo tiempo, Altman consiguió una inversión de 6.600 millones de dólares de Abu Dhabi, tras una visita diplomática que coincidió con un acuerdo de 2000 millones de dólares entre el enviado de Trump, Steve Witkoff, y el mismo fondo árabe, para una empresa de criptomonedas familiar. Aunque medios "verificadores" como Snopes

descarten sobornos, el patrón sugiere una intersección de intereses entre gobierno, oligarcas y fondos soberanos.

Finalmente, el texto subraya que este proyecto no es partidista, sino transversal a la oligarquía global. Figuras de la inteligencia estadounidense —como Gilman Louie, exdirector de In-Q-Tel (brazo de inversión de la CIA) y actual líder de America's Frontier Fund, respaldado por Eric Schmidt y Peter Thiel— impulsan las mismas "tecnologías fronterizas" que promueve la Nueva Agenda Urbana de la ONU.

En conjunto, el modelo de las ciudades-estado privatizadas representa una reconfiguración del poder global: descentraliza formalmente la soberanía estatal, pero la recentraliza en manos de corporaciones oligárquicas, con apoyo institucional pleno y una infraestructura de control digital universal. Lejos de ser libertario, es un sistema feudal digital, donde los "ciudadanos" son clientes cautivos, su comportamiento se gestiona algorítmicamente y su única vía de escape —huir— depende de su capacidad económica.

Así, el "Patchwork" imaginado por el Dark Enlightenment no es una fantasía distópica, sino una arquitectura de gobernanza en construcción, respaldada por las mismas élites que dicen oponerse al "gobierno mundial", pero que en realidad buscan reemplazarlo por un orden corporativo aún más autoritario y menos democrático.